

Antunes, Ricardo y Praun, Luci: “La (de)construcción del trabajo en el Brasil del siglo XXI”; en *REA*, N° XXIV, 2018; Escuela de Antropología – FHUMYAR – UNR; pp. 1-33.

La (de)construcción
del trabajo
en el Brasil del siglo XXI

Ricardo Antunes

Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Brasil
rlcAntunes53@gmail.com

Luci Praun

As Metamorfoses no Mundo do Trabalho (IFCH-UNICAMP)
Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidad Metodista de San Pablo
Brasil
luPraun@uol.com.br

Resumen

La actual crisis brasileña deriva de los procesos de mundialización y financiarización del capital, particularmente del impacto proyectado por la crisis del 2008 hacia el conjunto del sistema. Esta crisis afectó el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT), generando hacia 2013, protestas callejeras protagonizadas por la clase trabajadora, la cual se veía profundamente afectada en diversos aspectos de su vida. Dichas protestas expresaban las falencias del proyecto

social y político del PT. ¿Cuáles fueron los principales componentes de las políticas desarrolladas por el PT entre 2003 y 2016, que impactaron en los derechos sociales y laborales? ¿aportaron estas políticas elementos mayoritariamente positivos y adelantos, o resultaron en fracasos que amplificaron la profunda crisis que abatió los gobiernos del PT? El objetivo de este artículo es ofrecer un balance crítico de esta experiencia con el fin de dar algunas respuestas a estas inquietudes.

Palabras clave

trabajo – financiarización del capital – crisis – Partido de los Trabajadores (PT)

The (de)construction of work in Brazil in the twenty-first century

Abstract

The current Brazilian crisis derives from mundialization and financialization capital processes, especially the impact projected since 2008 crisis of the system. This crisis affected PT's project generating towards 2013 street protests of the working class who was strongly affected in different aspects of its everyday life. These protests expressed the weaknesses of the PT social and political project. Which were the main features of the policies developed by PT between 2003 and 2016 that had an impact on social and labour rights? Did they provide positive elements and advances or did they turn into failures that increased the deep crisis that demolished PT governments? The purpose of this article is to offer a critical assesment of this experience to give some answer to these concerns.

Keywords

work – capital financialization – crisis – Workers Party (PT)

*

Introducción

Las causas más profundas de la actual crisis brasileña tienen componentes globales. Derivan de los movimientos efectuados por el capitalismo en las últimas décadas del siglo

XX, en busca de dar impulso a sus ciclos de acumulación y desviarse, aunque fuera de manera temporal, de sus propios límites, expresos en crisis de profunda repercusión mundial. Durante la era en que la mundialización y la financiarización del capital alcanzaron su ápice, estas crisis se hicieron más frecuentes y profundas.

La crisis del 2008 y su impacto en los diferentes países del mundo son parte de este proceso. Inicialmente alcanzó los países capitalistas centrales como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, entre otros. Pero, dada su conformación *global, desigual y compleja*, se proyectó hacia diversas naciones del mundo asiático, alcanzando también países de desarrollo intermedio como los que componen los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y, de manera más pronunciada, la periferia del sistema.

En Brasil, las repercusiones de esta crisis fueron socavando poco a poco el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno desde el 2003, con la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Consolidado a lo largo de dos mandatos presidenciales consecutivos de Lula y, a partir de 2011, por su sucesora, Dilma Rousseff, el proyecto comenzó a dar claras señales de desmoronamiento en julio de 2013, cuando las protestas alcanzaron su ápice.

Las grietas del proyecto, profundizadas por la persistencia y el agravamiento de la crisis económica mundial, llevaron a las calles a un amplio sector de la juventud trabajadora. Sometida a la creciente precariedad del mercado del trabajo, imposibilitado su acceso a la educación de calidad, dejada a merced de un sistema de salud pública desgastado, y sin certezas de cara al futuro, esta camada de jóvenes catalizó su descontento en el aumento de las tarifas del transporte público.

Sin embargo, en el fondo, la manifestación de los jóvenes y la fuerte ola de huelgas que vivió el país ese año, reflejaban las falencias de un proyecto que, a pesar de haber brotado de las esperanzas y deseos de cambio de muchos, no fue capaz de concretarlos. La realidad brasileña comenzó entonces a ser develada y, con ella, el fracaso social y político de los gobiernos del PT.

¿Cuáles fueron los principales componentes de las políticas desarrolladas por el PT entre 2003 y 2016, que impactaron en los derechos sociales y laborales? ¿aportaron estas

políticas elementos mayoritariamente positivos y de progreso o resultaron en fracasos que amplificaron la profunda crisis que abatió los gobiernos del PT? El objetivo de este artículo es ofrecer un balance crítico de esta experiencia con el fin de dar algunas respuestas a estas inquietudes.

I. Entre la confrontación y el acuerdo

Como ya hemos indicado en otros textos, Brasil tuvo un destacado papel en las luchas operarias y sindicales durante la década de 1980, a través del cual consiguió retardar la implantación del neoliberalismo, que ya se expandía por varios países de América Latina como Chile, Argentina y México, entre otros. Mientras que en los países del Norte el liberalismo se ponía en marcha, nuestro país caminaba a contramano de esas tendencias regresivas.

Luego de las históricas protestas del ABC Paulista¹ a fines de la década de 1970, con el surgimiento del *novo sindicalismo*, las huelgas se generalizaron en el país, alcanzando amplios sectores de la clase trabajadora. Los sindicatos de clase crecieron enormemente y surgieron incontables movimientos sociales, lo que significó un período de diseminación de luchas sociales y políticas de gran envergadura (Antunes, 2004, 2006b, 2015; Praun, 2005, 2006 e 2012).

La intensa movilización social de la década de 1980 impulsó también la fundación y crecimiento del PT y la creación de la Central Única de los Trabajadores (CUT). Contradictoriamente, de manera paulatina también produjo la creciente inserción de buena parte de sus militantes y activistas sindicales en las estructuras del Estado brasileño.

Las victorias electorales alcanzadas por el PT, si bien reflejaron la consolidación de una base social en gran medida forjada en las movilizaciones sociales de la década de 1980, también se convirtieron en un importante punto de apoyo para el fortalecimiento de una práctica política que pasó a caracterizarse, en la década siguiente, por la preocupación de formular propuestas que se consideraran viables institucionalmente. Las

¹ Región industrial formada por Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires y Rio Grande da Serra, municipios de la Región Metropolitana de San Pablo

apreciaciones de la dirección mayoritaria del PT sobre las razones que llevaron a la derrota de Lula en las elecciones presidenciales de 1989 resaltan esta tendencia, expresada los años siguientes en la participación de la CUT, en 1992 y 1993, en las Cámaras del Sector Automotriz, entre otras iniciativas² (Praun, 2012).

Se hacía evidente en esa participación, la búsqueda no solamente por demostrar una postura activa en la “elaboración de una política industrial con bases democráticas”, conforme lo defendido en su momento por el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC (marzo/1992, p.5), sino la disposición de llegar al poder central mediante la vía institucional sin poner en riesgo el orden y la estructura social establecida. Esa disposición pudo ser observada con mayor claridad diez años después, durante las elecciones de 2002, que resultaron en el primer mandato presidencial de Lula. Durante la disputa electoral, el PT publicó la *Carta al pueblo brasileño*, firmada por Lula, en la que garantizaba al mercado financiero una futura política de control de la economía y de respeto a los “contratos y obligaciones del país”.

Durante los años transcurridos entre las experiencias con las Cámaras Sectoriales y las elecciones del 2002, medidas de flexibilización de la producción y del trabajo (instauración de los bancos de horas y de días, adopción de mecanismos dedicados al trabajo polivalente y multifuncional, reducción del piso de ingreso en cuanto a las categorías profesionales, flexibilización de la remuneración por medio de la política de participación en los resultados, entre otras) pasaron a ser defendidas e incorporadas de manera frecuente en los acuerdos colectivos firmados por sindicatos afiliados a la CUT, siendo el sindicalismo metalúrgico del ABC Paulista el principal entusiasta de esta práctica (Praun, 2005, 2006, 2012)

Vale destacar que, a pesar de encontrarse regulado por la Ley 9.601/98³, el Banco de Horas, instrumento de flexibilización de la jornada de trabajo y de conversión de la remuneración relativa a las horas extra en horas a ser compensadas, pasó a formar parte del Acuerdo Colectivo firmado entre el Sindicato de metalúrgicos del ABC Paulista y Volkswagen en 1996, dos años antes de su instauración por ley.

² Sobre las Cámaras Sectoriales del Sector Automotriz, ver Galvão (1996).

³ La legislación, entre otras medidas, agrega al artículo 59 de la Ley de *Consolidação das Leis do Trabalho* (CLT) una modificación que posibilita la instauración del Banco de Horas.

En *Flexibilização das relações de trabalho no setor automotivo*, publicada en 1999, el sindicato criticó la lentitud de la legislación en relación a la flexibilización del trabajo. Según los representantes del sindicato,

La Constitución de 1988, que redujo la jornada anual de 48 a 44 horas semanales, no permitió aún que se intensifique la flexibilidad de la jornada de trabajo. Solo de manera reciente, tres años después de las primeras negociaciones entre capital y trabajo, se verificaron las primeras medidas gubernamentales de adaptación de la legislación a la nueva realidad (Oct. 1999, p.15) [cita traducida]

La iniciativa del sindicato señalaba una cuestión de alto impacto en el proceso de desregularización de los derechos laborales: la prevalencia de lo acordado por sobre lo legislado. El tema ingresó inicialmente en la agenda del Congreso Nacional de Brasil en 2001, con el envío del Proyecto de Ley n°5.483 por parte del entonces presidente de la nación, Fernando Henrique Cardoso. Este Proyecto proponía la alteración del artículo 618 de la *Consolidação das Leis do Trabalho* (CLT), pero fue retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo al iniciar el primer gobierno de Lula⁴.

Si bien el proyecto de ley generó la fuerte resistencia de diversos segmentos de la sociedad⁵, su retiro del Congreso, lejos de traducirse como un retroceso, coincide en 2003, con la constitución del Foro Nacional del Trabajo (FNT). Este órgano se compuso de representantes del Estado, del empresariado y del movimiento sindical, y tenía por meta discutir y proponer modificaciones en la CLT como un todo, como abordaremos más adelante.

Otra iniciativa con la intención de hacer prevalecer lo acordado por sobre lo legislado, atajo importante para la reforma sindical y laboral, ocurrió en 2011 cuando el Sindicato de Metalúrgicos del ABC elaboró⁶ y envió al gobierno federal el Anteproyecto de Ley *Acordo Coletivo Especial* (ACE). La propuesta instauraba la posibilidad de acuerdos

⁴ Se trata actualmente en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 4.193 de 2012, autoría del diputado Irajá Abreu, de contenido similar al tratado por el Proyecto de Ley 5.483/2001.

⁵ Souto Maior (2014) destaca la movilización promovida por la ANAMATRA (*Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas*), por la ANPT (*Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho*) y por la ABRAT (*Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas*) que, aún en el 2001, se opusieron a la aprobación del mencionado proyecto.

⁶ La propuesta fue firmada también por otros sindicatos metalúrgicos de la base de la CUT, como el Sindicato de Metalúrgicos de Taubaté, el Sindicato de Metalúrgicos de Sorocaba y Región y el Sindicato de Metalúrgicos de Salto.

dentro de cada empresa si considerasen justificables las “adecuaciones en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y en la aplicación de la legislación trabajadora” (art 2º, inciso III). Con ese fin también proponía una importante modificación en la estructura sindical brasileña, con la instauración de los Comités Sindicales de Empresa, órganos responsables de promover negociaciones y firma de acuerdos colectivos internos a cada empresa, siempre que su existencia derivase de la estructura legal del sindicato profesional en cuestión.

En lo que refiere al proceso de tercerización de actividades en las líneas de producción, vale la pena citar los argumentos del sindicato, elaborados en la década de 1990. No dejan lugar a dudas sobre la intención de la estrategia adoptada por la vertiente sindical que sustenta el proyecto de gobierno del PT,

Se hace necesaria en ese contexto una táctica que combine firmeza y flexibilidad. En primer lugar, deben alejarse dos conductas igualmente inaceptables: la postura conformista [...] y [...], la estrecha postura de rechazar el debate y la negociación en torno al asunto.

En uno de estos casos estaríamos siendo conciliadores y traicionaríamos los intereses de los trabajadores. En el otro estaríamos encaminándonos por un sendero donde la victoria sería poco probable; más allá de significar una huida de nuestra responsabilidad de clase, que tiene como objeto influir los rumbos del desarrollo industrial con crecimiento de la producción, modernización, innovaciones tecnológicas y recuperación de la competitividad (SMABC, febrero/1993, p.16) [cita traducida]

A lo largo de la década de 1990, durante el fortalecimiento del neoliberalismo y las medidas consagradas a reestructurar la producción y el trabajo, se consolidaría en el interior de la CUT una práctica sindical concentrada en la presentación de propuestas viables que evitasen el enfrentamiento entre capital y trabajo, privilegiando la negociación en detrimento de la movilización.

Se buscaba como resultado posibilitar la victoria electoral por medio de la construcción de un acuerdo con las diferentes facciones de la clase dominante para la gestión del capitalismo brasileño.

II. El PT en el gobierno

Al momento de la victoria electoral de Lula en 2002, luego de dos mandatos consecutivos de Fernando Henrique Cardoso, Brasil se había transformado en un país más diverso, con una coyuntura nacional diferente a la de décadas anteriores e inserto en un nuevo contexto internacional. Esto se debe a que las elecciones ocurrieron cuando el *transformismo* (Gramsci, 1989) ya impregnaba las prácticas políticas del PT, lo que lo transformó gradualmente en una variante del *Partido del Orden* (Marx, 1974), cada vez más moderado e institucionalizado en sus métodos, prácticas y acciones.

El neoliberalismo que se desarrolló en la década de 1990 con Collor y Fernando Henrique Cardoso, había *desertificado* el país y el PT ya no era un partido *centralmente* dirigido a los intereses de la clase trabajadora. Oscilaba cada vez más entre la resistencia al neoliberalismo y la aceptación y defensa de una nueva pragmática, más policlasista⁷.

El primer gobierno de Lula, iniciado en enero de 2003, fue entonces caracterizado más por la *continuidad* que por la *ruptura* con el neoliberalismo, puesto que desarrolló políticas claramente semejantes a aquellas propuestas por el socioliberalismo que florecía a partir del experimento realizado por el Nuevo laborismo de Tony Blair⁸.

Vale destacar que, a lo largo del primer mandato, la política económica desarrollada por Lula nunca cuestionó la hegemonía de los capitales financieros. Lejos de esto, siguió rigurosamente las pautas indicadas por el FMI, manteniendo así los elementos estructurales que preservaban el capitalismo y que caracterizaban nuestra formación social burguesa.

No es casual entonces que, bajo la conducción de la fórmula de Lula, entre fines de 2004 y comienzos de 2005 (durante el primer gobierno del PT), haya ganado fuerza la propuesta de reforma sindical elaborada por el ya mencionado órgano tripartito, Foro Nacional del Trabajo (FNT). Más allá de que esta propuesta haya sido obstaculizada tanto por la crisis política que alcanzó duramente al gobierno durante el llamado Escándalo de las mensualidades (*Mensalão*), como por la fuerte oposición de diversos sectores

⁷ Retomamos aquí varias ideas presentadas específicamente en ANTUNES, 2004, 2006b y 2015.

⁸ Ver el rico y exhaustivo balance crítico del neoliberalismo y sus distintas variantes en Pradella y Marois (2015).

sindicales — tanto de derecha como de centro y también de izquierda —, fue el más profundo emblema del sentido de *conciliación* presente en el primer gobierno de Lula.

Las propuestas que emergieron de las negociaciones del FNT iban a contramano de los principios que orientaron la creación de la CUT. Estos aspiraban a un sindicalismo independiente, desligado del Estado que, en buena medida, estuvo en la base de la constitución del *novo sindicalismo*. A través de estas propuestas orientadas a la flexibilización de los derechos laborales que procuraban beneficiar a las cúpulas sindicales en detrimento de las bases operarias, se buscó transferir el ejercicio de negociación hacia las centrales y sus direcciones, restringiendo el accionar de los sindicatos y de las asambleas de base. Las centrales incluso, pasaron a ser consideradas y definidas por su nivel de representación, dificultando la organización de entidades más autónomas, ya que lo propuesto pasó a contemplar límites mínimos para el reconocimiento de la representación de los sindicatos. Por último, establecía que el cobro del aporte sindical y demás contribuciones o tasas asistenciales serían sustituidas por la denominada “*Contribuição de Negociação Coletiva*” (de hasta 1% del ingreso neto del año anterior del trabajador), obstaculizando directamente la posibilidad de una contribución autónoma, libre y voluntaria de los trabajadores para la manutención de los sindicatos (Antunes, 2006b)

Ese proceso marca el inicio del primer gobierno de Lula y vale destacar que el verticalismo sindical, las prácticas cupulistas y el excesivo burocratismo — que tanto criticó la CUT durante sus primeros años de existencia — se encontraban impregnados en esta propuesta de reforma sindical, tanto por la tentativa de reducción de lo que aún se preservaba de organización sindical de base, como por el abandono del trípode *libertad, autonomía e independencia* sindical, principios del llamado *novo sindicalismo* y por eso, considerados vitales e innegociables en su origen (Antunes y Silva, 2015; Antunes y Santana, 2014)

Fruto de la polémica y resistencia generadas en el interior del movimiento sindical, no se avanzó en la tentativa de restringir la participación de los sindicatos y asambleas de base en los procesos de negociación. No obstante, parte de las medidas llegaron a ser contempladas por la Ley 11.648 de 2008, que reguló las centrales sindicales brasileñas, estableciendo los requisitos para que fueran reconocidas oficialmente. La ley también

estableció, mediante una modificación en la CLT, nuevos criterios de distribución del aporte sindical de forma que contemplase a las centrales.

Es también relevante resaltar el contexto en el que se desarrolló la nueva política de control del sindicalismo y su *sentido dúplice*. Por un lado, durante el gobierno de Lula, la cúpula sindical pasó a ocupar importantes cargos en la alta burocracia estatal (en ministerios, en los consejos tanto de empresas estatales como privadas). Por otro, la incorporación de las centrales a la estructura sindical oficial hizo viable tanto la integración de esas entidades al *Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador* (CODEFAT) – órgano tripartito responsable por la gestión del FAT – como la recepción de recursos vinculados directamente al FAT u otros fondos estatales. Frente a un escenario marcado por la unidad sindical en su base y por un pluralismo sindical en las cúpulas, tales mecanismos fortalecieron y aproximaron aún más las centrales sindicales principales del gobierno de Lula.

El universo sindical también se alteró significativamente entre el primer y el segundo gobierno de Lula: más allá de la CUT, de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB)⁹, de la Fuerza Sindical – fundada en 1991 con un perfil ideológico de derecha pero integrando la base de apoyo sindical del gobierno de Lula –, el espectro sindical englobaba también otras pequeñas centrales que buscaban ampliar su participación, como la Central General de los Trabajadores de Brasil (CGTB), la Unión General de los Trabajadores (UGT), la *Nova Central*. Algunas de ellas con pequeño nivel de representación sindical, herederas del viejo sindicalismo ligado al Estado y que veían en la aproximación al gobierno la posibilidad de ampliación de los recursos y de los fondos estatales.

Posteriormente, en abierta oposición a los gobiernos de Lula y Dilma, se organizó la Coordinación Nacional de Luchas (CONLUTAS), entidad fundada en 2004 y que en 2010 pasó a denominarse CSP-Conlutas (Central Sindical y Popular). Como parte del mismo proceso también nació, en 2006, el denominado movimiento INTERSINDICAL, que luego se dividiría en dos vertientes. Estas corrientes sindicales, al contrario de las

⁹ Formada originalmente por la Corriente Sindical Clasista, que se desafilió de la CUT en 2007 para crear su propia central.

anteriormente citadas, rechazaban cualquier tipo de recurso oriundo del viejo sindicalismo de Estado.

No en vano estas corrientes sindicales fueron constituyéndose en los primeros años del gobierno de Lula, teniendo como base entidades sindicales que rompían con la CUT y se erigían en oposición al gobierno del PT. Parte de este proceso es la adhesión de un importante número de sindicatos ligados a la función pública nacional a las nuevas centrales, sobre todo a la CSP-Conlutas. Las bases de estos sindicatos fueron duramente afectadas por la reforma previsional y la llamada reforma universitaria, llevadas adelante por Lula en los inicios de su primer mandato.

Además de la postura de oposición al gobierno del PT y del rescate de la independencia de las entidades sindicales frente al Estado, otras características de estas centrales merecen atención. La CSP-Conlutas defiende, desde su origen, la constitución de una central que aglutine no solamente las entidades sindicales tradicionales, sino también las oposiciones sindicales, las organizaciones juveniles, los movimientos populares, como también aquellos constituidos en torno a la lucha contra la opresión de las mujeres, negros y negras, LGBT, etc. De esta manera busca convertirse en un instrumento de lucha capaz de condensar y representar una parcela de la clase trabajadora cada vez más compleja y heterogénea, fruto del impacto del neoliberalismo y del proceso de reestructuración productiva sobre el mundo del trabajo.

Por su parte, la INTERSINDICAL, con un perfil sindicalista más marcado, tiene como gran preocupación la recuperación del *sindicalismo por la base*, encontrándose claramente dividida, entre la creación o no de una nueva central.

III. La búsqueda de una nueva base social de apoyo

Al final de su primer mandato, Lula realizó importantes modificaciones en sus políticas sociales en busca de reconquistar un apoyo que estaba siendo erosionado, principalmente, en función de la profunda crisis política iniciada por el Escándalo de las mensualidades, lo que podría haber puesto en riesgo su reelección en 2006 (Antunes, 2006a).

Uno de los cambios más significativos se originó con la expansión del *Programa Bolsa-Família* (PBF). Su surgimiento a nivel nacional se remonta a la unificación y mejoramiento de las “transferencias de ingresos” desarrolladas bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Se trata de un programa que durante el gobierno de Lula comenzó a generar gran impacto entre los grupos más pobres de la sociedad brasileña, aun significando un bajísimo costo para el presupuesto público nacional. Según muestran los datos de 2008 obtenidos por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por su sigla en portugués), “el costo del PBF representa solamente el 0,38% del PBI y alrededor del 3% del gasto en beneficios previsionales y asistenciales del país” (Pochmann, 2010:8) [cita traducida].

El *Programa Bolsa-Família* tiene como meta llegar al 20% más pobre de la población brasileña, fijando como prioritaria la franja del 10%. Aspira, de esta manera, a impactar en los indicadores de desigualdad por medio de la eliminación del llamado “*excesso de desigualdade*”. Este índice, a su vez, se identifica a partir de la comparación entre índices de apropiación de ingresos de países considerados con un nivel de desarrollo similar al brasileño (Barros, Carvalho y Mendonça, 2010)

En 2006, fin del primer mandato presidencial de Lula, el PBF amplió el número de beneficiarios, pasando de los 3,6 millones de familias¹⁰ directamente alcanzadas por el programa en enero de 2004, a 11 millones. El número de familias asistidas se mantuvo estable durante 2007 y 2008, ampliándose nuevamente a lo largo de 2009, cuando pasó a abarcar 13,7 millones de familias (Soares y Sátyro, 2010). Los datos relativos al número de personas beneficiadas por el programa ofrecen, sin embargo, una mejor dimensión de su repercusión. De acuerdo con el estudio realizado por Constanzi e Fagundes (2010:264),

En marzo de 2010, el número de personas que recibían el *Bolsa-Família* llegó a 48.680 millones. Considerando que la población estimada en 2009 era de 19.1480 millones, significaría que el *PBF* beneficiaba cerca de un cuarto de la población total del país (25,4%). Este porcentaje variaba de 14,9% en el sudeste (el menor valor), hasta 45,6% en

¹⁰ En enero de 2004, otros 4,2 millones de familias aún eran beneficiarias de programas remanentes del gobierno anterior, como *Bolsa Escola*, *Bolsa Alimentação* o del *Cartão Alimentação*. A lo largo de los años y por medio de un registro único, el PBF fue agrupando diferentes beneficios de acuerdo con el perfil familiar, lo que resultó en la eliminación de los programas anteriores. En 2008, solamente alrededor de 15 mil familias eran beneficiarias de los antiguos programas.

el noreste (mayor valor). “[...] La mayor cobertura del programa en relación a la población total se da, especialmente, en los municipios de las regiones del norte y del noreste, más allá de que existan ciudades con una cobertura más elevada en otras regiones” [cita traducida].

Esta política social asistencialista, que se constituyó como principal bandera del gobierno del PT, fue considerada ejemplar por el Banco Mundial. Orientada no tanto a la clase trabajadora organizada, estrato social del que provenía Lula, sino a quienes dependen del auxilio del estado para su supervivencia, el Programa comenzó a alcanzar los sectores más empobrecidos.

Los datos de 2010, obtenidos a través del *Cadastro Único*¹¹ (Registro Único), muestran que el perfil de los beneficiarios del *PBF* coincide con el prototipo de la desigualdad social brasileña, que reserva los espacios de mayor pobreza a la población afrodescendiente, las mujeres y los jóvenes. En todas las regiones del país la participación de las mujeres entre los beneficiarios era del 54,2% en abril de 2010. Este índice es aún más preponderante si consideramos quiénes son los responsables legales de las familias, que en el 92,5% de los casos son mujeres. Estos responsables, a su vez, se concentran en una franja etaria entre los 25 y 34 años (35,5%) y entre los 35 y 44 años (29,5%) (Costanzi y Fagundes, 2010).

Cuando el punto de vista se dirige hacia el recorte étnico-racial, los datos señalan una población beneficiaria compuesta fundamentalmente por afrodescendientes, siendo el 65,3% autoreconocidos como pardos y el 7,5% como negros, configurando el 72,8% del total de asistidos. Los datos de abril de 2010 señalan también la baja escolaridad de los beneficiarios del programa, el 81,1% sin la educación primaria completa, siendo el 15,8% analfabetos (Costanzi y Fagundes, 2010)

Los montos recibidos por las familias beneficiarias del *PBF* varían. El mínimo, denominado beneficio básico, actualizado en julio del 2016, es de R\$85,00. A este valor pueden sumársele otros beneficios que se consideran *variables*, de un monto de R\$39,00. No obstante, a pesar del bajo costo, al alcanzar a un cuarto de la población brasileña por debajo de la línea de pobreza, el programa repercute de manera importante tanto desde el

¹¹ Sistema de control y entrecruzamiento de los beneficiarios de programas sociales del gobierno nacional.

punto de vista *económico*, proveyendo poco a quien prácticamente no tiene nada, como *político*, conformando por años una base social fundamental desde el punto de vista electoral. A través de esta acción se consolida una migración importante en la base social del segundo gobierno de Lula, de la clase trabajadora más organizada — base original del PT — en dirección a los asalariados más empobrecidos, con menor nivel de organización sindical y política, o incluso sin ellas, y provenientes de áreas menos industrializadas del país (Antunes, 2006a)

Otra acción gubernamental que incidió sobre los segmentos más pobres de la población fue la política de aumento real del salario mínimo, más allá de que aun con los reajustes se mantuvo por debajo de los niveles contemplados por la Constitución y defendidos por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE).

Sin embargo, es importante resaltar las contradicciones de este proceso. Por un lado, el gobierno del PT, sobre todo a partir de 2006, impulsó políticas asistenciales, enfocadas en el *Programa Bolsa-Família* y en el aumento real del salario mínimo; avalado en estas iniciativas construyó su base de apoyo entre los segmentos más pauperizados de la sociedad. Por otro, desde su primer mandato, avanzó en las reformas previsionales, intentó profundizar el proceso de flexibilización laboral, por medio de la instauración del Foro Nacional del Trabajo, e instituyó dos leyes que afectan fuertemente los derechos de los trabajadores (Krein y Biavaschi, 2015)

La primera, Ley 11.101 del 9/2/2005, establece, en palabras de Souto Maior (2014:5), el “*calote trabalhista*”¹², ya que destituye, en situaciones de rescate financiero y quiebra de empresas, la posibilidad de exigir el pronto pago (hasta 150 salarios mínimos) frente a los demás acreedores, estableciendo una lógica de distribución de los riesgos del negocio, entre el empleador y el trabajador (Souto Maior, 2014)

La segunda, Ley 10.820 del 17/12/2003, da inicio al proceso de regulación del crédito consignado en las nóminas. Dicha legislación, además de proteger a las instituciones financieras, dándoles la seguridad de recibir préstamos y financiación con débito directo en la nómina, proveyó sustento a un programa de gobierno que, a lo largo de muchos

¹² Deuda que se genera para con el trabajador y que permanece impaga de parte de los empleadores. [N.de T.]

años, se hizo viable mediante el incentivo al consumo asociado al endeudamiento de los trabajadores (Krein y Biavaschi, 2015)

Fue en este contexto que en 2008, dos años antes de terminar su segundo gobierno, Lula reconoció oficialmente las centrales sindicales otorgándoles legitimidad, al mismo tiempo que amplió la percepción del aporte sindical incluyendo también esas entidades sindicales de cúpula, lo que las convirtió en beneficiarias del nefasto impuesto, tan duramente criticado por la CUT en sus orígenes (Silva, 2008; Praun, 2005, 2006, 2012; Antunes y Silva, 2015)

De esta manera, más allá de los recursos del *Fundo de Amparo ao Trabalhador* (FAT) como así también de los innumerables apoyos financieros ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, el aporte sindical, creado durante la dictadura de Vargas, pasaba a ser usufructuado por las centrales. La transformación de la CUT, de una central sindical crítica e independiente de los gobiernos en una entidad fuertemente afín con las acciones y políticas del gobierno de Lula¹³, solamente sirvió para desorientar al movimiento sindical en el combate y oposición al ideario de fondo neoliberal, aunque se tratase de su nueva variante socioliberal. Esto se realizó desplazando los intereses históricos de la clase trabajadora para defender una acción más negociadora y de acuerdo. La CUT se distanció de su proyecto sindical y político original, que ya venía desapareciendo de sus propuestas y acciones (Silva, 2008; Praun, 2005, 2006, 2012; Antunes y Silva, 2015)

El sindicalismo de Estado daba señales de fuerte revitalización, sumado a un componente propositivo. La práctica negociadora, la dependencia estatal (política, ideológica y financiera) y la política de conciliación de clases bajo el comando de Lula, se volvieron aún más intensos, distanciando el movimiento sindical de aquel que, en un reciente pasado, había sido positivamente designado como *novo sindicalismo*, aproximándolo a una especie de *sindicalismo negociador de Estado* (Antunes y Silva, 2015)

“El sindicalismo lulista”, como destaca Braga (2015), “se transformó no solamente en un activo administrador del Estado burgués, sino en un actor clave del arbitraje de la

¹³ No deja de ser sintomático de esta nueva postura política adoptada por la CUT el hecho de que su expresidente Luiz Marinho, integrante de la *Articulação Sindical*, haya sido ascendido al cargo de ministro del trabajo del gobierno de Lula.

propia inversión capitalista en el país” [cita traducida]. Preocupado por la rentabilidad de los fondos que pasó a administrar, tal como bien señaló Francisco de Oliveira (2008), y con sus integrantes ocupando diversos puestos en la estructura del Estado brasileño,

La alta burocracia sindical “se financiarizó”, es decir, fundió sus intereses de estrato social privilegiado al ciclo de acumulación del capital financiero. De esta manera, el *petismo* militante de las huelgas y los movimientos sociales de los ‘80 y parte de los ‘90, se alejó de sus orígenes, tornándose socio menor del bloque de poder capitalista de Brasil (Braga, 2015) [cita traducida]

IV. Las políticas laborales

Señalamos anteriormente que las acciones llevadas a cabo por los gobiernos de Lula, si bien matizadas por un tinte socioliberal, representaron una continuidad en relación a los fundamentos de la política económica de corte neoliberal aplicada por su antecesor. A través del mantenimiento del *superávit primario*, el gobierno de Lula preservó los intereses del capital financiero. En lo que refiere a la legislación laboral, además de la introducción del cobro de la contribución previsional a los jubilados — lo que generó un gran descontento en el sindicato de los trabajadores públicos, uno de los pilares de la CUT en sus orígenes — intentó, sobre el final de su gobierno, llevar adelante una reforma sindical y laboral, a pesar de la fuerte oposición tanto de sindicatos y centrales sindicales patronales como de otras entidades vinculadas a los trabajadores (Antunes, 2006b, 2014; Galvão, 2007)

En el momento en que la crisis mundial golpeó con fuerza los países capitalistas centrales, el gobierno de Lula tomó medidas con el objetivo de incentivar, por medio de la acción del Estado, el crecimiento económico a través de la ampliación del mercado interno. Para eso, entre otras medidas, el gobierno redujo los impuestos al sector automotriz, al de la fabricación de electrodomésticos y al de la construcción civil, todas áreas de gran incorporación de fuerza de trabajo.

Si bien, según indica Pochmann (2012), en la década de 1990 atravesamos un período de fuerte reducción de los empleos formales¹⁴, en la década siguiente, durante los gobiernos de Lula y el inicio del primer gobierno de Dilma, se crearon 21 millones de puestos de trabajo, lo que evidencia una amplia incorporación de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral. Sin embargo, ese aumento de puestos de trabajo tuvo ciertas particularidades. Es preciso destacar que el 94,8 % de los trabajadores incorporados al mercado formal recibían una remuneración baja (1,5 salario mínimo por mes). Las actividades que tuvieron mayor crecimiento a lo largo de este período fueron: servicios, con 6,1 millones de nuevos empleos; seguidos por los trabajadores del comercio, con 2,1 millones; de la construcción civil, con 2 millones; administrativos, con 1,6 millones, de la industria textil, con 1,3 millones, y del sector público, con 1,3 millones (Pochmann, 2012; Antunes, 2014).

Como afirma Pochmann (2012:32), estas profesiones representaron “14,4 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que significó el 72,4 % de todas las ocupaciones con remuneraciones también de hasta 1,5 salario mínimo mensual” [cita traducida]. Vale la pena agregar que fue significativa la ampliación del trabajo femenino, llegando a casi el 60 % de los puestos de trabajo. En relación a la franja etaria, la mayor parte se concentró entre los 25 y 34 años.

Pero la precariedad y el nivel de degradación del trabajo también se hicieron evidentes a partir de otros indicadores que ofrecen una visión panorámica del mercado laboral brasileño. A lo largo del gobierno de Lula, según destaca Braga (2015),

El número de accidentes y muertes en el trabajo creció y la tasa de rotación del empleo aumentó [...]. ¿Y cómo iba a ser de otra manera si los principales motores del actual *régimen de acumulación* posfordista y financiarizado son la industria de la construcción pesada y civil, la agroindustria y el sector de servicios? Además, a pesar del reciente crecimiento económico, la estructura social brasileña no superó aún su condición de semiperiférica. Esto implica la combinación de un gran número de empleos baratos con

¹⁴ Según Pochmann, “se crearon 11 millones de empleos, de los cuales el 53,6 % no preveían remuneración. En el sector de ingresos de hasta 1,5 salario mínimo hubo una reducción líquida de casi 300 000 puestos de trabajo”).POCHMANN, 2010). [cita traducida]

un bajo índice de inversión en ciencia y tecnología, fortaleciendo así el despotismo empresarial [cita traducida].

En este contexto, se hace imperioso enfatizar que, si bien los gobiernos del PT lograron aumentar el número de trabajadores/as empleados y formalizados y, de esa manera, reducir los índices de desempleo, no consiguieron eliminar las condiciones de vulnerabilidad presentes en los altos índices de informalidad y en el creciente contingente de tercerizados. Estos factores son los que acentúan la precarización de la fuerza de trabajo en nuestro país. De esta manera, la desregulación y la ampliación de las formas de subcontratación se mantuvieron, si bien en niveles menores a los de los años noventa.

De este proceso contradictorio, lo más significativo tal vez haya sido la enorme expansión del nuevo proletariado de servicios que se desarrolló producto tanto de la reestructuración productiva como del significativo proceso de privatización de las empresas estatales y de los servicios públicos. La enorme expansión del trabajo en *call centers* y *telemarketing* en las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los hipermercados, la industria hotelera, etc., cada vez más insertas en el proceso de valorización del capital, provocó el nacimiento de un nuevo proletariado de servicios, el *infoproletariado* o *cybertariat* (Antunes y Braga, 2009; Huws, 2003)

Si a lo largo de la década de 1980 era relativamente pequeño el número de tercerizados (subcontratados), en las décadas siguientes ese número creció, conformando un contingente significativo de trabajadores y trabajadoras frecuentemente sin vínculo laboral ni registro formal, que padecían altos índices de rotación, a veces al margen de la legislación laboral. Todo esto contribuyó a rediseñar la morfología del trabajo en Brasil (Antunes, 2006b, 2014, 2015; Druck, 1999, 2011; Druck y Franco, 2007)¹⁵

Fue con esa programática (social, sindical y laboral) que Lula implementó una política policlasista de cooperación y conciliación muy exitosa durante un largo período. Este programa contó con el apoyo de los diferentes sectores del empresariado, beneficiando

¹⁵ En un estudio realizado por el DIEESE, los sectores considerados “típicamente tercerizados” correspondían al 25,5 % de los empleos formales en Brasil, siendo su remuneración 27,1 % menor que la de los demás empleados formales. En relación a la jornada laboral, los tercerizados trabajan en promedio 3 horas más y su tiempo de permanencia en el empleo es 55,5 % menor que la de los demás empleados. Su tasa de rotación/*turn over* es del 44,9 %, mientras que en las demás empresas es del 22 %). DIEESE-CUT, 2011). Ver también Riqueza y Miseria del Trabajo, Vol. III, op. cit.

enormemente a las diversas facciones del gran capital, en particular el financiero e industrial que, como sabemos, guardan una fuerte simbiosis entre sí, a pesar de que algunas veces hayan disputado espacios en la conducción de la política económica gubernamental, en conjunto con el sector del agronegocio y de las demás facciones burguesas, todas partícipes del proyecto lulista.

En la cima de la pirámide social, los grandes capitales lucraron como pocas veces en la historia reciente del país y prácticamente en todos sus segmentos. En la base, el gobierno del PT (y su amplia coalición) implementó una política social mucho más amplia que sus antecesores, aunque de perfil predominantemente asistencialista, buscando minimizar en alguna medida la miseria brasileña. Algunos sectores de la base más empobrecida de nuestra pirámide social pudieron ascender algunos escalones, especialmente en la esfera de los bienes de consumo, a expensas, sin embargo, como pudo constatarse después, de su enorme endeudamiento.

Su política de preservación y ampliación del salario mínimo, aunque abusivamente bajo comparado con los valores indicados por el DIEESE, también permitió que el segundo gobierno de Lula superara la profunda crisis del final de su primer mandato y aumentara intensamente sus niveles de popularidad. No obstante, es fundamental enfatizar que *ninguno* de los *pilares estructurantes* de la miseria brasileña fue efectivamente enfrentado. Y este componente estructural de fondo se acentuó a fines del primer gobierno de Dilma y al inicio del segundo, cuando la crisis brasileña se intensificó.

V. El gobierno de Dilma, las protestas de 2013 y el deterioro del mito

El gobierno de Dilma comenzó en 2011, y mantuvo prácticamente la misma receta económica del segundo gobierno de Lula: crecimiento económico dirigido al mercado interno; incentivo a la producción de *commodities* para exportación; reducción de los impuestos destinados a atender las demandas de distintas facciones del capital, como la industrial, la de la construcción civil, etc. Se conservó también la política financiera basada en los altos intereses, garantizando de ese modo, en buena parte de su primer gobierno, el respaldo del capital financiero. Fue solo cuando las repercusiones de la crisis

internacional se acentuaron en Brasil que el gobierno de Dilma implementó una política de reducción de intereses, a través de los bancos estatales.

Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica internacional, que ya no se restringía a los países del Norte sino que pasó a afectar directamente a los BRICS, fue minando lentamente la base social burguesa que había sustentado los gobiernos de Lula y Dilma. Además de este punto central, otros componentes aumentaban las escisiones y rupturas en relación al gobierno de Dilma: 1) en la escena política, la Operación *Lava Jato* involucraba directamente al PT y a su principal aliado, el viejo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en nuevos escándalos de corrupción; 2) en el universo social, aumentaba el descontento a propósito de los límites del proyecto del gobierno y su distanciamiento cada vez mayor de los movimientos sociales y de los sindicatos que eran originalmente la base social del PT (Antunes, 2015)

Las fisuras del proyecto que estructuró los gobiernos del Partido de los Trabajadores, cada vez más expuestas y acentuadas por la persistencia y la profundización de la crisis económica mundial, no tardaron, por consiguiente, en llevar a las calles a los segmentos más precarizados de la juventud trabajadora. A pesar del aumento de los empleos, estos puestos, reservados mayoritariamente a mujeres, jóvenes y negros, acentuaron todavía más la perversa lógica que subyace al mercado laboral brasileño desde hace años: las bajas remuneraciones y su incidencia entre aquellos grupos tradicionalmente discriminados en él (Braga, 2013, 2015).

Fue en este contexto político que, en 2013, de modo completamente inesperado e imprevisible, estallaron las protestas de junio. ¿Cuáles fueron sus principales causas?

Sabemos que las protestas de junio se originaron a partir de las acciones organizadas, por largo tiempo y en varias capitales del país, por el Movimiento Pase Libre (MPL). Estas acciones, que tenían como motivación inicial la defensa del pase libre estudiantil, poco a poco pasaron a abarcar la lucha contra el aumento de las tarifas del transporte público en general, en defensa de la movilidad urbana. En 2013, sin embargo, estas manifestaciones se ampliaron de manera exponencial, pasando a incorporar una muy variada gama de banderas y reivindicaciones.

Tal vez podamos resaltar que las protestas encontraron sus causas de fondo en una coyuntura especial, en la que concurrían elementos estructurales más amplios y el surgimiento de una crisis política latente. La convergencia de estos componentes generó la combustión que llevó a las movilizaciones, develando el agotamiento del proyecto petista.

Los jóvenes trabajadores, que estuvieron presentes y fueron amplia mayoría en las plazas públicas, denunciaban que el transporte era privado y caótico, que la salud pública estaba siendo degradada y la enseñanza pública, abandonada. Se revelaban, de alguna manera, contra la *mercadización* de su vida cotidiana.

Las manifestaciones sucedieron, además, en una coyuntura especial, marcada por la *Copa Confederaciones*. Momento en que el uso de recursos públicos para intereses privados vinculados a la construcción de estadios (las denominadas “arenas”) y a conglomerados transnacionales y de las grandes corporaciones involucradas en el *entertainment* futbolístico, permitió aflorar una simbiosis profunda entre la FIFA, el gobierno de Dilma, las corporaciones transnacionales y las diversas facciones burguesas relacionadas con el gobierno, en un momento de agravamiento de la crisis.

Este escenario se configuró de una forma aún más explosiva, ya que nos encontrábamos ante un contexto internacional caracterizado también por protestas, en el que las masas populares se apropiaron de los espacios públicos, ejercitando prácticas plebiscitarias, horizontalizadas, contrarias a las organizaciones tradicionales, manifestando, así, franca oposición a las *formas de representación* y de *institucionalidad* vigentes tanto en los países capitalistas de Occidente como en las dictaduras que se perpetuaban en Medio Oriente.

Estas manifestaciones, que se prolongaron por un largo período, fueron polimorfas y policlasistas. Se iniciaron con fuerte presencia popular, en particular de los estudiantes que trabajan o de los trabajadores que estudian, junto a sectores más politizados de la juventud, movimientos sociales urbanos o de las periferias, partidos de izquierda, sindicatos y otras agrupaciones sociales y políticas.

También contaron con el apoyo de amplios contingentes de las clases medias bajas, medias y altas, además de algunas facciones dominantes, en la medida en que las

manifestaciones pasaron a tener una fuerte presencia de sectores más conservadores, *aparentemente* apolíticos, con posturas ideológicas más de derecha. Sin embargo, si bien estos grupos no condujeron las manifestaciones de 2013¹⁶, rápidamente desarrollaron campañas sistemáticas contra las izquierdas y los movimientos sociales y particularmente contra Dilma, Lula y el PT. Todo esto creó las condiciones que indicaron que esa nueva fase crítica sería la más profunda hasta entonces enfrentada por el gobierno de Dilma y los anteriores gobiernos del PT.

VI. Entre las protestas y la ola huelguista

El 2013 no estuvo solo marcado por las grandes movilizaciones en las calles. A lo largo de este año, los trabajadores brasileños protagonizaron una ola huelguista inédita en la historia del país. En total, según un estudio realizado por el DIEESE (2015), se registraron 2050 huelgas, lo que significó un crecimiento del 134 % en relación al año anterior en el que se llevaron a cabo 877.

Otro dato relevante identificado por ese estudio se relaciona con la cantidad de huelgas desencadenadas en empresas privadas. En 2013, las huelgas en este sector superaron en cantidad a las del sector público, representando un 54 % del total. Estas huelgas, con importante participación de los trabajadores y trabajadoras del sector de servicios, se caracterizaron en gran medida por su naturaleza defensiva, es decir, por reclamos relacionados con la “defensa de las condiciones de trabajo vigentes, [...] en relación a condiciones mínimas de trabajo, salud y seguridad o contra el incumplimiento de derechos establecidos en acuerdos, convenciones colectivas o leyes” (DIEESE, 2015:8) [cita traducida]. La tabla 1, a continuación, muestra el número de paros y las principales causas que llevaron al estallido de este importante movimiento huelguista en 2012 y 2013:

¹⁶ Ver el enorme conjunto de artículos sobre las protestas de junio en Sampaio Jr).2014).

TABLA 1
Principales reivindicaciones de las huelgas
Brasil, 2012 y 2013

Reivindicación	2012		2013	
	nº	%	nº	%
Reajuste salarial	359	40,9	738	36
Alimentación en horario de trabajo	238	27,1	549	26,8
Condiciones de trabajo	133	15,2	430	21
PCS - Plan de Cargos y Salarios	201	22,9	394	19,2
Pago de salarios atrasados	160	18,2	375	18,3
PLR - Participación en los Lucros y/o Resultados	167	19	249	12,1
Piso salarial	142	16,2	228	11,1
Asistencia médica	108	12,3	208	10,1
Lugar de trabajo	41	4,7	207	10,1
TOTAL	877	100	2050	100

Fuente: DIEESE. *Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG - DIEESE)*

Obs.: La suma de las partes puede resultar superior al total de las huelgas, ya que una misma huelga puede responder a diferentes reclamos.

Copia [traducida]: Tabla 13 (DIEESE, 2015, p.10)

La relevancia adquirida por los reclamos relacionados con las condiciones de trabajo, el tercero con mayor presencia en las protestas de 2013, indica el avance de los mecanismos de precarización entre la clase trabajadora brasileña¹⁷. En el caso específico de los funcionarios públicos y los trabajadores de empresas del Estado, los reclamos de esta naturaleza aparecen junto con las reivindicaciones relacionadas con una mayor contratación de funcionarios o de aquellos relacionados con el cumplimiento o el establecimiento del Plan de Cargos y Salarios (DIEESE, 2015)

El año 2013 se configura, en ese sentido, como el momento en que, en medio de la crisis social abierta, estalla, junto con las movilizaciones en las calles, un amplio movimiento huelguista expresado de diferentes formas. Algunas veces, las acciones involucraron categorías de profesionales a nivel nacional, como las huelgas realizadas por los bancarios. En otras ocasiones, fueron más cortas y en los lugares de trabajo, contando o no con el liderazgo de los sindicatos. La huelga de los barrenderos de Río de Janeiro,

¹⁷ La repercusión del proceso de reestructuración productiva y de la precarización laboral en la salud de los trabajadores es analizada por Praun (2016).

en marzo de 2014, tal vez haya sido una de las más emblemáticas del período que comenzó en 2013.

La clase trabajadora no permaneció indiferente, se hizo evidente, sobre todo entre 2012 y 2013, que las huelgas sumaron al descontento social y político asociado al gobierno de Dilma. El proyecto lulista, en curso desde hacía una década, comenzaba a colapsar. Desde profesores hasta barrenderos, desde bancarios hasta metalúrgicos, desde trabajadores de la salud y del transporte hasta tercerizados, en fin, una variedad de sectores de asalariados desencadenó este nuevo ciclo huelguista que, de alguna manera, expresó el descontento en relación a las condiciones de trabajo y salario, la lucha por la ampliación de conquistas ya alcanzadas, o aun solidaridad en relación a otros asuntos, sumándose a reclamos más amplios, presentes en el escenario social y político del país.

Fue en este marco crítico que el gobierno de Dilma llegó a las elecciones de octubre de 2014, cuando la intensidad de la crisis económica se acentuaba. Vencedor, aunque luego de una dura competencia, su segundo gobierno, comenzado en enero de 2015, se inclinó rápidamente hacia las nuevas exigencias de las diferentes facciones del capital, que comenzaban a dar señales de descontento aún mayores con relación al gobierno. El acuerdo policlasista, diseñado por Lula y sostenido por el PT, estaba llegando a su fin.

Con el objetivo de evitar que ese movimiento se expandiera, Dilma amplió el superávit primario; incentivó nuevas privatizaciones en aeropuertos, puertos, rutas, etc.; aumentó la tasa de intereses y llevó adelante un ajuste fiscal que castigó duramente a la clase trabajadora, asumiendo públicamente banderas — como la de la reforma previsional — cada vez más exigidas por las clases dominantes.

Por otro lado, poco tiempo después de la victoria electoral, en medio del creciente descontento popular, del aumento del trabajo precarizado y del desempleo, Dilma modificó los requisitos para el otorgamiento del seguro de desempleo. Aumentó el plazo mínimo de trabajo ininterrumpido (de 6 a 12 meses) para la obtención del beneficio por primera vez, y también lo aumentó para los casos de nuevas solicitudes. Y, como si no fuera suficiente, promovió modificaciones en los criterios de otorgamiento de la pensión por fallecimiento, mostrando claramente que el costo de la crisis lo pagaría, una vez más, la clase trabajadora.

En junio de 2016, cuando el escenario que proyectaba el *impeachment* a Dilma parecía irreversible, el desempleo afectaba ya a 11,5 millones de trabajadores. La tasa de desempleo¹⁸ pasó, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), del 6,5 % en el cuarto trimestre de 2014, al 9,5 % en el primer trimestre de 2015¹⁹, llegando en junio de 2016, al 11,3 %. Además del aumento del desempleo, la clase trabajadora enfrentó el fuerte deterioro de sus ingresos, que experimentaron una caída del 4,2 % si se los compara con lo registrado en abril y junio de 2015, con valores promedio aproximados a los de tres años y medio atrás, a pesar de la inflación.

Con la crisis internacional, las diferentes facciones burguesas que anteriormente habían respaldado a los gobiernos del PT comenzaron a abandonar el proyecto. Así, además de castigar aún con mayor dureza a los asalariados, el gobierno de Dilma se vio inmerso en un fuerte conflicto intraburgués, ya que, en este contexto de crisis, aumentaron las disputas en torno a quién saldría menos golpeado por la pérdida de beneficios que derivaría del escenario económico. Fue entonces que este contexto de inestabilidad se agravó intensamente por el estallido de la Operación *Lava Jato*, que empujó al gobierno de Dilma hacia una situación que en agosto de 2016 avanzaba hacia la concreción del *impeachment*.

VII. Consideraciones finales

El primer año y medio del segundo gobierno de Dilma se desarrolló en medio de una interminable sucesión de crisis en todos los niveles: político, económico, social e institucional; consecuencia, como intentamos explicar, de una compleja combinación de

¹⁸ En medio del creciente desempleo, a partir de junio de 2015, entró en vigencia el Programa de Protección al Empleo (PPE), implantado por medida provisional por el gobierno de Dilma. Esta medida, considerada de emergencia y convertida en la Ley 13.189, permitió que empresas, mediante alegato de dificultades financieras y por medio de un acuerdo colectivo, pudiesen reducir la jornada laboral y los salarios hasta en un 30 %. Parte de la pérdida salarial de los trabajadores (50 %), según prevé la Ley, sería compensada con fondos del FAT. Empresas como Mercedes Benz, que a lo largo de casi dos décadas fueron beneficiadas con la reducción de impuestos, estableciendo constantemente récords de productividad y ventas, firmaron acuerdos de esa naturaleza. En agosto de 2016, antes de que el acuerdo llegara a su fin e incumpliendo con la estabilidad prevista en la legislación del PPE, la empresa automotriz inició el proceso de despidos. Días después, las suspendió para firmar un nuevo acuerdo, esta vez, dirigido a la apertura de otro programa, el Programa de Dimisión Voluntaria (PDV).

¹⁹ Indicadores del IBGE/ Pnad Continua (DIEESE, mayo de 2016).

elementos más o menos simultáneos: 1) la expansión de la crisis económica internacional y sus efectos en Brasil, que creyó en el mito petista del modelo de crecimiento basado en *commodities*, en la ampliación del consumo y del mercado interno y en la supuesta inmunidad de la que gozaba el país, preparado para cualquier oscilación y adversidad externa; 2) el aumento de la crisis política a raíz de las denuncias de corrupción que involucraban, por segunda vez, a parte de la cúpula política y del gobierno del PT; 3) el descontrol político y la desestabilización del arco de alianzas que sustentaban el gobierno de Dilma, producto del descontento del PMDB y gran parte de la base de aliados resultante del proyecto lulista; 4) el profundo descontento popular, que aumentó con las medidas de “ajuste fiscal” implementadas a comienzos del año 2015. Medidas que castigaron aún más a la clase trabajadora, provocando consecuencias inmediatas en el aumento del desempleo.

Sin embargo, se engañan aquellos que creen o quieren creer que la crisis se limita al gobierno de Dilma. Si bien por un lado el gobierno de Dilma Rousseff tiene ciertas particularidades que deben tenerse en cuenta, por otro, la crisis de su gobierno debe entenderse en el marco de fin de ciclo de un modelo de gobierno concebido y construido a partir de una astuta política de conciliación policlasista. Esta estrategia política fue capaz de articular, durante tres mandatos consecutivos del PT, profundas concesiones para los diferentes sectores de la clase dominante a través de algunas medidas de redistribución de ingresos con un bajo costo, el aumento de los trabajos formales marcados por la precarización contractual y salarial, y una política de incentivo del consumo basada en el aumento de los créditos y del endeudamiento de la clase trabajadora.

El éxito temporal de este proyecto quizá se deba más a la profunda desigualdad social que atraviesa la historia del capitalismo periférico brasileño que a la habilidad de sus mentores. Debe tenerse en cuenta también, como intentamos indicar anteriormente, la creciente incorporación de importantes segmentos del movimiento sindical y popular a las estructuras del Estado. Esa inserción de parte de los dirigentes sindicales en las diversas esferas del gobierno, si bien por un lado fortaleció la construcción de un nuevo sector social con intereses especiales, por el otro, funcionó como un importante instrumento para frenar las movilizaciones sociales y viabilizar reformas útiles para las

diferentes facciones de la clase dominante. El sindicalismo de Estado, asumiendo una postura de negociación y de conciliación, contribuyó también a la desorganización de la clase trabajadora brasileña, cuando accedió a formar parte del poder en un proyecto de conciliación de clases que fue incapaz de enfrentar algunas de las cuestiones estructurales que sostienen el capitalismo brasileño, excluyente y elitista.

Con el colapso del proyecto y el fin del mito de la era de “las grandes conquistas sociales”, los gobiernos del PT (con Lula como su principal artífice), dejaron de formar parte del amplio abanico de sectores dominantes que sustentaron, en los estratos burgueses, el mito lulista. Y aunque no haya sido posible derrotarlo electoralmente en el 2014, poco a poco fue gestándose su salida del gobierno.

Como los sectores dominantes no quisieron esperar hasta el 2018, fue necesario forjar una alternativa *extraelectoral*. A pesar de que los gobiernos del PT hayan hecho siempre todo lo que las clases dominantes exigían, incluso en el ámbito sindical y laboral, el profundo cambio de coyuntura llevó a la decisión de descartarlos para poder sustituirlos por un gobierno estrictamente servil y cumplidor de las nuevas exigencias del capital. Un gobierno capaz de implementar un conjunto de medidas sociales y laborales aún más destructivas, aquellas que la *dominación burguesa* exige al país en tiempos de crisis aguda.

No es una novedad que la dominación burguesa en Brasil siempre ha oscilado entre la *conciliación* y el *golpe*. En el contexto de crisis actual, las diferentes facciones burguesas, profundamente internacionalizadas y financiarizadas, decidieron (con respaldo político, legislativo y jurídico) descartar el gobierno de Dilma y el PT y, así, decretar el fin de este ciclo de conciliación policlasista construido por el lulismo en sintonía con los grandes intereses del mundo burgués. Y este fin de ciclo solo sería posible, en la actualidad, a dos años de las próximas elecciones, por medio de un *nuevo tipo de golpe*, de apariencia parlamentaria, pero respaldado por una legislación de carácter riesgosamente excepcional. Y Brasil, una vez más, parece adherir a esta nefasta tradición.

Resulta urgente, en este escenario, la constitución de un nuevo polo social y político alternativo, formado por las fuerzas sociales amplias y diversificadas del mundo del trabajo, capaces de organizar luchas sociales, sindicales y políticas. Un polo que provenga

de las periferias, de las fábricas, de las empresas, de los sindicatos de clase, de los movimientos sociales, de las comunidades indígenas, todos movimientos de una gran densidad social, pero que aún necesitan caminar en dirección a una nueva forma social y política, capaz de crear lazos y avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad, de un modo diferente de vida que pueda superar la lógica destructiva del capital, presente con tanta fuerza en Brasil y que los gobiernos del PT, por desgracia, fueron incapaces de desmontar.

Referencias bibliográficas

ANTUNES, R. (2004) *A Desertificação Neoliberal no Brasil: Collor, FHC e Lula*. Campinas: Editores Associados

_____ (2006a) *Uma esquerda fora do lugar*. O governo Lula e os descaminhos do PT. Campinas: Autores Associados

_____ (2006b) Construção e desconstrução da legislação social no Brasil. In:

ANTUNES, R. (Org.) (2006c) *Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil*. San Pablo: Boitempo

_____ (2015) A fenomenologia da crise brasileira. *Revista Lutas Sociais*, San Pablo, vol. 19, p. 09-26, julio/diciembre.

_____ (2014) Desenhando a nova morfologia do trabalho no Brasil. *Revista de Estudos Avançados*, USP, San Pablo, v. 28, n. 81, p. 39-53, agosto. Disponible en <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142014000200004&lng=pt&nrm=iso>. Consultado el 30/07/2016.

ANTUNES, R. y R. BRAGA (Orgs.) (2009) *Infoproletários: degradação real do trabalho virtual*. San Pablo: Boitempo

ANTUNES, R. y M.A. SANTANA (2014) Para onde foi o novo sindicalismo? Caminhos e descaminhos de uma prática sindical. In: RIDENTI, M.; AARÃO REIS, D. y Motta, Rodrigo Patto Sá (Organizadores). *A ditadura que mudou o Brasil*, Río de Janeiro (RJ): Zahar Editor

ANTUNES, R. y J. SILVA (2015) Para onde foram os sindicatos? Do sindicalismo de confronto ao sindicalismo negocial. *Caderno C R H*, Salvador, v. 28, n. 75, p. 511-528, Septiembre/Diciembre

BARROS, R. P. de, M. de CARVALHO y R. MENDONÇA (2010) Dimensionando o Programa Bolsa Família. In: CASTRO, J. de y L. MODESTO (Orgs). *Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios*. Brasília: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA por su sigla en portugués), Vol. 2, p. 349-356.

BRAGA, R (2015) Os contornos do pós-lulismo. *Revista Cult*, Edición 206, Octubre. Disponible en <<http://revistacult.uol.com.br/home/2015/10/contornos-do-pos-lulismo/>>. Consultado el 20/07/2016.

_____ (2013) Sob a sombra do precariado. En: HARVEY, D.; MARICATO, E.; ZIZEK, S.; DAVIS, M. et. al. *Cidades Rebeldes*. Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. San Pablo: Boitempo

BRASIL. Foro Nacional del Trabalho (2005) *Proposta de Emenda à Constituição: Projeto de Lei de Relações Sindicais*. Brasília, MTE. Disponible en <http://www3.mte.gov.br/fnt/PEC_369_de_2005_e_Anteprojeto_de_Reforma_Sindical.pdf> Consultado el 30/07/2016.

_____ (2004) *Resoluções do Relatório Final da Comissão de Sistematização*. Brasília, MTE, marzo. Disponible en: <http://www3.mte.gov.br/fnt/Relatorio_Final_da_Comissao_de_Sistematizacao.pdf > Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (1943) *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Decreto ley nº 5.452 del 1 de mayo. Aprobación de la Consolidación de las Leyes del Trabajo. Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (1998) *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Ley 9.601, del 21 de enero. Dispone los contratos de trabajo por tiempo determinado. Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9601.htm>. Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (2008) *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Ley 11.648 del 31 de marzo. Dispone el reconocimiento formal de las centrales sindicales para fines que especifica, modifica la *Consolidação das Leis do Trabalho* – CLT. Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos2007-2010/2008/Lei/L11648.htm>. Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (1990) *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Ley 13.134 del 16 de junio de 2015. Modifica las Leyes nº 7.998 del 11 de enero, que regula el *Programa do Seguro-Desemprego* y el *Abono Salarial* e instituye el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), nº 10.779 del 25 de noviembre de 2003 (...) Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2015/Lei/L13134.htm>. Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (2005) *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Ley 11.101 del 9 de febrero. Regula la *recuperação judicial*, la *extrajudicial* y la quiebra de la empresa y de la sociedad empresarial. Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2004-2006/2005/lei/111101.htm>. Consultado el 30/07/2016.

_____. Presidencia de la República. Jefatura de Gabinete (2003). *Subchefia de Assuntos Jurídicos*. Ley 10.820 del 17 de diciembre. Dispone la autorización para el descuento de prestaciones en la nómina de pagos. Disponible en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.820.htm>. Consultado el 30/07/2016.

CARDOSO, A (2010) *A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades*. Rio de Janeiro: FGV.

COSTANZI, R. y F. FAGUNDES (2010). Perfil Dos Beneficiários Do Programa Bolsa-Família. En: CASTRO, J. de y L. MODESTO (Orgs). *Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios*. Brasília: IPEA, Vol. 1, p. 249-268.

DIEESE (2015) Balance de las huelgas 2013. *Estudos e Pesquisas*, nº79, diciembre. Disponible en <<http://www.dieese.org.br/balancodasgreves/2013/estPesq79balancogreves2013.pdf>>. Consultado el 30/07/2016.

_____ (2016) Boletim Emprego em Pauta. Mayo. Disponible en: <<http://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2016/boletimEmpregoEmPauta.pdf>>. Consultado el 20/07/2016.

DIEESE / CUT-Nacional (2011) *Terceirização e Desenvolvimento - uma conta que não fecha*. Dossier sobre el impacto de la tercerización en los trabajadores y propuestas para garantizar la igualdad de derechos. Septiembre. Disponible en: <<http://2013.cut.org.br/sistema/ck/files/terceirizacao.PDF>>. Consultado el 30/07/2016.

DRUCK, M. G. (1999) *Terceirização: (des)fordizando a fábrica: um estudo crítico do complexo petroquímico*. San Pablo: Boitempo.

_____ (2011) Trabalho, precarização e resistências. *Caderno CRH (UFBA)*, Salvador, v.24.

DRUCK, G. y T. FRANCO (Orgs) (2007) *A perda da razão social do trabalho: terceirização e precarização*. San Pablo: Boitempo.

GALVÃO, A (2007) *Neoliberalismo e Reforma Trabalhista no Brasil*. San Pablo: Ed. Revan/FAPESP.

_____ (1996) *Participação e fragmentação: a prática sindical dos metalúrgicos do ABC nos anos 90*. Disertación de maestría, Campinas: Depto. De Ciencia Política del IFCH, Unicamp.

KREIN, J. y M. BIAVASCHI (2015) Brasil: os movimentos contraditórios da regulação do trabalho dos anos 2000, *Cuadernos del Cendes* AÑO 32. N° 89 TERCERA ÉPOCA MAYO-AGOSTO, pp. 47-82. Disponible en: <[Http://www.scielo.org.ve/pdf/cdc/v32n89/art04.pdf](http://www.scielo.org.ve/pdf/cdc/v32n89/art04.pdf)>. Consultado el 20/07/2016.

MARX, K ([1974]) *O 18 Brumário e cartas a Kugelmann*. Río de Janeiro, Paz e Terra

OLIVEIRA, F (2008) *Crítica à razão dualista/O ornitorrinco*. San Pablo, Boitempo.

POCHMANN, M. (2010) Apresentação. Instituto de Investigación Económica Aplicada. En: CASTRO, J. de y L. MODESTO (Orgs). *Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios*. Brasília: Ipea, Vol. 1, p. 8-10.

_____ (2012) *Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira*. San Pablo: Boitempo.

PRADELLA, L. y T. MAROIS (Edit) (2015) *Polarising development: alternatives to neoliberalism and the crisis*. Pluto Press, Londres.

PRAUN, L. (2005) A teia do capital: reestruturação produtiva e “gestão da vida” na Volkswagen do Brasil: Planta Anchieta, Campinas, Disertación de Maestría, Universidad Estatal de Campinas.

_____ (2006) Reestruturação negociada na Volkswagen: São Bernardo do Campo. In: ANTUNES, Ricardo (org.). *Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil*. San Pablo: Boitempo.

_____ (2012) Sindicalismo metalúrgico no ABC Paulista: da contestação à parceria. En: TRÓPIA, P. y D. SOUZA (Orgs). *Sindicatos metalúrgicos no Brasil contemporâneo*. Belo Horizonte, MG: Fino Traço.

_____ (2016) Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho. Campinas: Ed. Papel Social.

SAMPAIO, Jr., P. (2014) *Jornadas de Junho*, San Pablo, Instituto Caio Prado/ICP.

SILVA, J. B. da (2008) *Racismo e sindicalismo: reconhecimento, redistribuição e ação política das centrais sindicais acerca do racismo no Brasil (1983-2002)*. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) - Universidad Estatal de Campinas / Instituto de Filosofia y Ciencias Humanas, Campinas, SP.

SILVA, L. I. (2018) Carta ao povo brasileiro. Disponible en: <<http://novo.fpabramo.org.br/uploads/cartaaopovobrasileiro.pdf>>. Consultado el 20/07/2016.

SINDICATO DE METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Y DIADEMA (1992) *Reestruturação do complexo automotivo brasileiro – as propostas dos trabalhadores na Câmara Setorial*. São Bernardo do Campo, SP: marzo.

SINDICATO DE METALÚRGICOS DEL ABC (1993) *Os trabalhadores e a terceirização*. Diagnóstico e Propostas dos metalúrgicos do ABC. São Bernardo do Campo: Gráfica e Editora FG, febrero.

_____ (2011) ACE – Acordo Coletivo Especial. Septiembre. Disponible en <http://www.smabc.org.br/Interag/temp_img/%7B016A7A92-EDB2-48D8-8734-F9C3617D2E1A%7D_cartilha_ace_v4_nova.pdf>. Consultado el 20/07/2016.

SINDICATO DE METALÚRGICOS DEL ABC; SUBSECCIÓN DIEESE (1999) *Flexibilização da produção e das relações de trabalho no setor automotivo*. São Bernardo do Campo, SP: octubre.

SOARES, S. y N. SÁTYRO (2010) O Programa Bolsa Família: desenho institucional e possibilidades futuras. En: CASTRO, J. de y L. MODESTO (Orgs). *Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios*. Brasilia: Ipea, Vol. 1, p. 27-55.

SOUTO MAIOR, J. L. (2014) Velhas e novas ameaças do neoliberalismo aos direitos trabalhistas. Disponible en <<http://www.anamatra.org.br/index.php/artigos/velhas-e-novas-ameacas-do-neoliberalismo-aos-direitos-trabalhistas>>. Consultado el 20/07/2016.

Recibido: 15/12/2017

Evaluado: 15/04/2018

Versión final: 18/06/2018

Cita sugerida:

Antunes, R. y L. Praun (2018). “La (de)construcción del trabajo en el Brasil del siglo XXI”. En: Revista de la Escuela de Antropología (XXIV), Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Versión en línea disponible en: <https://revistadeantropologia.unr.edu.ar/index.php/revistadeantropologia/article/view/Antunes.Praun>